José Antonio Gil Heredia

Juez sustituto, L'Hospitalet de Llobre. Socio de la FICP.

~Compatibilidad de los trabajos en beneficio de la comunidad con la pena de prisión~

I. BREVE INTRODUCCIÓN A LA ESENCIA DE LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN NUESTRO CÓDIGO PENAL.

Los trabajos en beneficio de la comunidad es una de las penas, no privativas de libertad, previstas en nuestro Código Penal y que se concibe como una pena privativa de derechos, en el artículo 39 del Código Penal. El Código Penal, dentro del listado de penas privativas de derechos, debe estimarse como la privación del derecho a un trabajo remunerado, en el sentido de que la pena, como uno de los paradigmas de la moderna doctrina, limita una serie de derechos como la libertad de deambulación, desarrollo de actividades comerciales, profesión e incluso derechos personales como el ejercicio del derecho a la patria potestad, suspensión de empleo o cargo público, conducir vehículos o ciclomotores, tenencia al porte, derecho a recibir subvenciones y desgravaciones fiscales y el derecho a la tenencia de armas.

El interés que genera este tipo de pena lo es no sólo entre la doctrina político criminal, sino para la ciudadanía en general, el penado en particular y desde el punto de vista de la victimología como herramienta para la reparación del daño. En este sentido no puede perderse de vista que los trabajos en beneficio de la comunidad (TBC) están previstos como pena alternativa¹ a la multa pero también a la pena de prisión y que ésta puede ser elegida o descartada (motivadamente, desde luego) por el juez enjuiciador, a la hora de imponer la pena.

En numerosas ocasiones la pena de trabajos coincide como pena alternativamente imponible, a elección del juzgador, como pena aplicable al injusto cometido, como ocurre en los delitos contra la seguridad vial, del artículo 379 del Cp o incluso los delitos de violencia de género o doméstica del artículo 153, amenazas del artículo 171, coacciones leves del artículo 172 e injurias o vejaciones injustas del artículo 173.4 del Código penal también como pena alternativa. Dicha alternatividad es necesaria puesto

¹ Art. 153, 171.4 y 5, 172. 2 y 3, 172 ter, 244, 173. 4, 274, 379, 384, 385, entre otros, del Código Penal.

que jamás podrá preverse como pena única a imponer por un tipo determinado toda vez que siempre se requiere el consentimiento del reo para su imposición², con expresa prohibición de los trabajos forzados³.

Es el artículo 49 del Código Penal el que define la pena de TBC como aquella que obliga a la prestación no retribuida de actividades de utilidad pública y el que define las finalidades de la pena dirigidas tanto a la prevención general como la especial de determinados delitos, toda vez que el mismo precepto contiene que los trabajos a realizar podrán consistir en aquellas actividades relacionadas con el delito cometido por el condenado, labores de reparación del daño y de apoyo o asistencia a las víctimas como así consistir en programas formativos, de reeducación, laborales, sobre seguridad vial, sexual, etc. Especial relevancia ha tenido para nuestro juzgador este tipo de penas, desde su vertiente reeducativa, para los delitos contra la violencia de género y/o doméstica y los delitos contra la seguridad vial. Los programas formativos sobre seguridad en la circulación de vehículos a motor pero, sobre todo, aquellas tareas relacionadas con la evitación de riesgos en la seguridad vial y más aún, aquellos dirigidos al auxilio a las víctimas de delitos cometidos contra la seguridad viaria, se han revelado como altamente efectivos a la hora de que el condenado por una de estos comportamientos sea consciente de las posibilidades que contiene este delito de peligro de realizarse en un resultado concreto, cuando se asiste a víctimas de un accidente de tráfico o se ayuda a personas físicamente discapacitadas por causa de accidente. En la misma medida sucede con los programas formativos o de educación sexual sobre los delitos de violencia de género, dirigidos a la reeducación de actitudes machistas y/o violentas sobre la mujer, fomentadas por una educación generalizada en la desigualdad de sexos.

Aun con todo no podemos abstraernos a las amplias posibilidades que ofrece el artículo 49 del Código Penal, dirigidos a la reeducación del condenado y, con ello, obedeciendo al principio reeducador y de reinserción de que nuestra Constitución impone como un elemento ineludible de la pena. Amplias posibilidades que son desaprovechadas incluso, ex ante a la ejecución, a la hora de optar por la aplicación de la pena de TBC. No sólo por el legislador que, como podemos observar, introduce la pena en injustos muy concretos y de forma muy limitada a aquellos comportamientos

² Art. 49 del Código Penal.

³ Art. 25 CE.

que, como los delitos contra la seguridad vial, evidencian la necesidad para el penado de plasmar en la realidad el contenido del delito de peligro abstracto en el que se puede traducir la conducción ética o bajo la influencia de estupefacientes y la necesidad de conocer, de propia mano, que el establecimiento de una tasa alcohólica no obedece a un mero capricho del legislador, sino a un riesgo en la conducta. O, en su caso, como una modalidad de la sustitución de la pena⁴, una vez derogada la sustitución por la LO 1/2015 del antiguo artículo 88 del Cp, convertido ahora en una de las condiciones para la suspensión, ex artículos 80.3 y 84 del Código Penal. Esa parquedad legislativa podría ir dirigida a otros delitos que precisan de la indudable necesidad de educación social, como los delitos violentos o delitos contra el orden público o la hacienda pública. Pero no es cometido de este trabajo proclamar la posibilidad de aplicar la pena a otros tipos que no la tienen incorporada (por ejemplo no considero que existan motivos político criminales para no extenderla a todos los delitos contra la seguridad vial) sino apostar por la aplicación exhaustiva de lo que ahora tenemos, muchas veces desaprovechada, no sólo por el convencimiento generalizado de los jueces a la hora de reservar la pena para comportamientos “menos graves” previo a descartar la pena de prisión, sino a concebirla como una de las consecuencias penológicas más deseables, como solución retributiva. Como también desterrar la falta de eficacia de muchas penas de TBC cuando concurren en un mismo individuo que se halla cumpliendo otras condenas. En muchos casos la pena de TBC queda sin efecto, por la mera aplicación del instituto de la prescripción⁵. Y esto tanto en la ejecutoria de esa condena como a la hora de influir en juez sobre la elección de la pena por la posible inviabilidad de que la misma sea ejecutada cuando el penado esté en prisión o sea inminente su ingreso.

II. REGULACIÓN DE LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. NORMAS ESENCIALES Y PRESCRIPCIÓN.

1. Normas esenciales. A fin de acotar las vicisitudes antes señaladas que pueden subvenir a la aplicación o ejecución de los TBC, su desarrollo, contenido y control de ejecución viene regulado en el Real Decreto 840/2011⁶, que sustituye el

⁴ Artículos 53.1 y 71.2 del Código Penal.

⁵ Artículo 131 del Código Penal.

⁶ Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, por el que se establecen las circunstancias de ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y de localización permanente en centro penitenciario, de determinadas medidas de seguridad, así como de la suspensión de la ejecución de la penas privativas de libertad y sustitución de penas.

anterior RD 515/2005⁷ y que como su exposición de motivos vienen a motivar, se adecúa a la reforma de la LO 12/2015 que, como hemos visto, amplía su contenido a la posibilidad de participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.

Es importante destacar que su artículo 3 contiene la definición de los TBC para que, una vez recaída sentencia se remita el correspondiente mandamiento a los *servicios de gestión de penas y medidas alternativas del lugar donde el penado tenga fijada su residencia realizarán las actuaciones necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de la pena*. Organismo (competencia transferida en numerosos territorios a las Comunidades Autónomas) que deberá fijar las condiciones de cumplimiento de la pena que no sólo serán los competentes para coordinar el plan de trabajos, previa entrevista con el penado, sino para remitir los correspondientes informes de cumplimiento⁸. Estos son supervisados por la administración penitenciaria y aprobados por el Juez de Vigilancia Penitenciaria (sin perjuicio de lo que seguidamente veremos sobre los conflictos de competencia con el juez sentenciador).

Resulta esencial la previsión que hace la norma acerca de qué sucede en el momento de la fijación de los trabajos⁹ toda vez que consiste en determinar la actividad más adecuada, tanto con las posibilidades del penado (personales, laborales) y como con la perspectiva del delito cometido, así como horario y distribución para realizarlos. Pero también, insistimos, consistentes en la participación en talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares. Añade el precepto aquellas actividades que se realicen en un ámbito o institución no penitenciaria, lo que no deja lugar a dudas a que puedan realizarse dentro de la institución, esto es, mientras se cumpla condena privativa de libertad en centro penitenciario.

Cobra por ello especial relevancia el papel del Juez de Vigilancia Penitenciaria, como luego veremos en algunas Sentencias al efecto, ya que supervisará el plan de ejecución y decidirá su inmediata ejecutividad, debiendo acordar lo procedente incluso en el caso en que el penado acredite fehacientemente que se opone al cumplimiento del plan de ejecución. En cuanto al desempeño de jornadas de trabajos como modalidad

⁷ Real Decreto 515/2005, de 6 de mayo.

⁸ Real Decreto 840/2011 Artículo 4.

⁹ Real Decreto 840/2011 Artículo 5.

escogida para la prestación de servicios¹⁰ se concibe como una jornada laboral de duración máxima de 8 horas, teniendo en cuenta las circunstancias personales e incluso familiares, pudiendo efectuarse un plan partido de trabajo, por lo que tampoco encontramos un escollo legal a que las mismas sean realizadas por un condenado en pleno cumplimiento de una pena de prisión en situación penitenciaria progresada a tercer grado, con el correspondiente seguimiento del Juez de Vigilancia Penitenciaria¹¹, competente para el seguimiento y aprobación definitiva de su cumplimiento o incumplimiento¹². Para ello resolverá lo procedente en éste último caso, pudiendo declarar el incumplimiento de la pena y, por lo tanto, su posible quebrantamiento.

Para terminar el apartado legal, debemos preguntarnos si el propio Título Preliminar del Código Penal, en su artículo 3, supone un escollo para el cumplimiento de los TBC en centro penitenciario y de forma coetánea al cumplimiento de la pena de prisión. Este artículo establece, por principio, que la pena no podrá realizarse de otra forma a la prevista en las leyes y con otras circunstancias o accidentes que los expresados en su texto. De esta manera sabemos que las penas privativas de libertad se cumplirán íntegramente¹³ (también bajo las formas de suspensión de la pena o cumplimientos mediante beneficios penitenciarios –tercer grado, libertad condicional, etc.-) y en la forma prevista en el Reglamento Penitenciario¹⁴ que, conjuntamente con el artículo 75 del Código Penal, establece la prohibición del cumplimiento simultáneo de las penas cuando ello no sea posible por su propia naturaleza, abocando con ello al cumplimiento sucesivo por estricto orden de su gravedad. Lógicamente, siguiendo tal mandato, las penas de prisión más graves serán de liquidación preferente sobre las que lo son menos y, por descontado, pueden relegar al cumplimiento de los trabajos en último lugar o que llegue a ser inefectiva la condena. De ahí la importancia de establecer la posibilidad de su cumplimiento simultáneo y la coordinación, para ello, de todas las instituciones implicadas en el cumplimiento de la pena de TBC, desde su elección para su imposición por el Juez Penal, hasta las administraciones competentes para su aplicación; el Juez de Vigilancia Penitenciaria y, nuevamente, el Juez Penal que, de forma definitiva, deberá decidir sobre las consecuencias del incumplimiento, como

¹⁰ Real Decreto 840/2011 Artículo 6.

¹¹ Real Decreto 840/2011 Artículo 7.

¹² Apartado 6 del Artículo 49 del Código Penal.

¹³ Artículo 988 de la Lecrim.

¹⁴ Real Decreto 190/1996 Reglamento Penitenciario Artículo 193.2

así ha venido decidiendo nuestro TS, como indica Cervera Salvador, en cuestión de competencia entre ambas jurisdicciones¹⁵.

Siguiendo a la autora citada, nuestro Tribunal Supremo hace referencia a la nueva concepción de los TBC operada por la reforma, de los que resalta la circunstancia de que han dejado de ser una pena en sentido estricto y, con ello, se excluye a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria para su control¹⁶ de suerte que los TBC se han convertido también en una condición para la suspensión de la pena de prisión¹⁷.

2. En cuanto a la prescripción de los TBC, teniendo en cuenta la vinculación que pudiera hacer decantar al Juez Penal (lo que no debería) sobre la opción de la pena de TBC o, en su caso, la posibilidad de condicionar la suspensión de la pena de prisión, en el caso en que fuere posible, aun en el caso en que el penado se halle cumpliendo condena, tenemos que considerar que ésta última posibilidad no es inviable, aunque el reo esté cumpliendo una pena privativa de libertad que comprometa el cumplimiento de los TBC, o se cumplan los requisitos del artículo 80 del Código Penal, siempre a criterio judicial). Resulta necesario efectuar un escueto repaso a la prescripción de la pena de TBC de conformidad con lo previsto en el artículo 133 y partiendo de que la duración máxima de la misma no podrá ser de más de un año, esto es, pena menos grave¹⁸, lo que significa que la prescripción de la pena puede llegar a los 5 años o, si es inferior a una duración de 31 días, prescribe al año.

Con todo, la práctica en los Juzgados Penales y de Ejecutorias acredita que no es excepcional que en un mismo condenado concurren penas de prisión, incluso por una duración de más de 5 años, ya sea por refundición o acumulación de condenas por las reglas del artículo 76 del Código Penal, con TBC. En la misma sentencia o por condenas en sentencias distintas. Vistas las reglas del artículo 75 del Cp se tratará de intentar conjugar aquellas penas privativas con los TBC, entendiendo que no deben existir, o no deberían existir, obstáculos para la aplicación simultánea de la pena a fin de evitar el absurdo de su prescripción por la aplicación evidentemente preferente siempre de la pena de prisión para su cumplimiento.

¹⁵ CERVERA SALVADOR, Sabina. Ejecución de la Pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Cuadernos Digitales de Formación. CGPJ

¹⁶ Artículo 86 del Código Penal.

¹⁷ Artículos 809.3 y 84 del Código Penal.

¹⁸ Artículo 33 del Código Penal.

III. LA IMPORTANCIA DE LOS TRABAJOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD COMO PENA DE REINserCIÓN. CONCLUSIONES.

1. Casi todos los autores concilian alrededor de la concepción descrita en el artículo 49 del Código Penal a cerca de lo que pueden consistir dichos trabajos, abandonando algunas concepciones reducidas a la equiparación de los TBC a las prestaciones de servicios en instituciones públicas o de interés público que, sin ánimo de denostar éstos, no suponen el único recurso educativo para el penado. Cervera Salvador ¹⁹, con ocasión de la Instrucción 10/2015 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, menciona las distintas posibilidades que ofrecen los distintos programas formativos, en correlación con los delitos a los que, más habitualmente, viene ligada la pena, o condición suspensiva de TBC, como son los delitos de violencia de género o doméstica, delincuencia sexual, delitos contra el medio ambiente, etc. No olvidemos que, introducida la condición suspensiva (TBC) de la pena de prisión, ello puede llegar a vincular a esta figura reeducativa con casi todos los delitos cuya pena sea susceptible de ser suspendida y, con ello, se abre un amplio abanico a los cursos formativos, programas de educación, prestación de servicios, etc, cuando vemos que éstos deben guardar una relación adecuada con el delito cometido, a fin de que dichos trabajos estén revestidos del fin que les otorga la norma sin que ello suponga un cambio o trueque que de pena a la prevista por el legislador. No debemos olvidar que la pena que se suspende se efectúa bajo el régimen de las reglas del artículo 80 del Código Penal y que los TBC no se trata de una pena sustitutiva, sino de una condición suspensiva que, de no cumplirse, puede conducir al cumplimiento de la pena originaria. Es cierto que, mediante su introducción como condición suspensiva de la prisión, el legislador ha dejado en manos del juez la posibilidad de suspender multitud de penas, dentro del amplio espectro abierto por el artículo 80.3 del Código Penal que nos puede conducir a imponer la condición suspensiva a cualquier tipo de delito que no lo contemple como pena principal, sin que ello suponga una vulneración del principio de legalidad²⁰. Ya lo venía haciendo antes a través de la sustitución del antiguo artículo 88.

¹⁹ Cervera Salvador, Sabina. Ejecución de la Pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. Cuadernos Digitales de Formación. CGPJ

²⁰ Trapero Barreales. Revista de Derecho Penal y Criminología. Universidad de León. UNED. Pág. 69 en ref. a García Arán, Comparecencia para informar en relación con el Proyecto LO de reforma del CP (Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 503, 18 de febrero de 2014, 35); Muñoz Conde/García Arán, PG, 9.^a, 2015, 619 s.

Y aun aceptando la hipótesis²¹ de que la condición suspensiva se convierta efectivamente en una auténtica sustitución de la pena principal, ello no debe condicionar a la hora de optar por la pena o por la condición, por mucho que la misma se pudiera ver dificultada por una coetánea o eventual pena de prisión a cumplir.

La casuística de los conflictos observados en sede de ejecución de la condena, entre las penas de prisión y coetáneas a TBC nos permite traer algunas resoluciones en este sentido.

En una cuestión de competencia AAP de Toledo de 02/02/2006²²:

(...) Recibido por la Administración Penitenciaria el Testimonio de la sentencia firme, los servicios sociales han entrevistado al penado para conocer sus características personales, su capacidad laboral y el entorno social y familiar y han remitido al Juez de Vigilancia Penitenciaria el informe de 17 de mayo de 2005, en el que se hace constar que:

- a) El penado trabaja de lunes a viernes en la construcción, en Madrid.*
- b) El penado no dispone de vehículo propio.*
- c) El Ayuntamiento de Puebla de Almoradiel (residencia del penado) no tiene, durante los fines de semana actividad para que se realice una actividad semejante.*
- d) Que en la localidad no hay otras instituciones donde se pueda realizar esta actividad en las condiciones aportadas (posibilidad de control y fin de semana).*

El informe, recibido por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, le motiva a considerar que la pena no puede cumplirse y remite la ejecución al Juez sentenciador para que decida lo pertinente.

El Real Decreto que regula la pena de Trabajos en Beneficio de la Comunidad, no establece imperativamente que dichos trabajos tengan que ser realizados en compatibilidad de horario con el trabajo habitual. Se procurará la flexibilidad en la medida de lo posible, pero si no fuera posible, la pena debe cumplirse aunque sea incompatible con el trabajo habitual. Por ello, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, debe requerir a los Servicios Sociales penitenciarios para que

²¹ TRAPERO BARREALES. Revista de Derecho Penal y Criminología. UNED, 16, 2016, p. 175.

²² AAP de Toledo Secc.2ª nº recurso 1/2006 de 02/02/2006

formulen una propuesta de cumplimiento, adaptada en lo posible a lo previsto en el art. 6 del Real Decreto , pero dentro de la finalidad última del Derecho Penal que no es otro que el cumplimiento efectivo de las penas que no hayan sido suspendidas (...).

AAP de Donostia de 08/07/2011 ²³ en auto que estima la apelación contra la revocación de los trabajos:

(...) El recurrente argumenta que la precaria situación económica del penado, quién solo consta que ha realizado dos pagos por importe de 100 euros cada uno, le llevará nuevamente a delinquir para satisfacer la multa pendiente, so pena de hacer renacer o revivir la pena de prisión originariamente impuesta al mismo.

Frente a ello, el Juez de Ejecución Penal ya señala en el auto ahora combatido que con la modalidad de ejecución seleccionada se trata de no dificultar la posible reinserción del penado en el mercado laboral.

Por el contrario, el propio Decreto que regula la esta figura, de trabajos en beneficio de la comunidad, ya contempla su compatibilidad y adecuación a las necesidades laborales del penado obligado a cumplir esta pena.

Siendo éste el interés expresado por el penado, y respondiendo igualmente esta pena a los fines de prevención especial que persigue la ejecución penal, procede acceder a la sustitución en la modalidad por éste interesada, por lo que, aplicando las reglas de conversión que contempla el art. 88 y concordantes del C.P ., el penado deberá cumplir 125 días de trabajos en beneficio de la comunidad(...).

Y el siguiente que incide en la valoración de las circunstancias del penado para realizar los trabajos. AAP de Vitoria-Gasteiz de 20/11/2006 ²⁴:

“(...) PRIMERO.- Se impugna el auto de instancia en cuanto declara la imposibilidad de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, que había sustituido a la pena privativa de libertad. Considera los Servicios Sociales Penitenciarios deben buscar un centro donde poder cumplir los trabajos en beneficio de la comunidad y en caso contrario no puede sustituirse esa pena por la privativa de libertad. Añade que el centro Ibaiondo ofreció

²³ AAP de Donostia, Sección 1ª, de fecha 08/08/2011 Recurso 1360/2010

²⁴ AAP de Vitoria, Sección 1ª, de fecha 20/11/2006 Recurso 95/2006

buscar medios de cumplimiento antes de proceder a la ejecución de la pena de prisión, pero el interesado ya no reside en ese centro al haber cumplido las medidas impuestas, por lo cual al no encontrarse interno en Zumarraga podría cumplir los trabajos en cualquier lugar de la Comunidad del País Vasco.

SEGUNDO.- Sentado que la pena de doce meses de multa, con una cuota de tres euros por día, no fue cumplida y en aplicación del art. 53 del Código Penal se impuso, auto de tres de marzo de 2006 , la pena subsidiaria de seis meses de privación de libertad, y después, al no ser procedente la suspensión de la ejecución, esa pena fue sustituida por la de trabajos en beneficio de la comunidad, como refiere el auto de ocho de septiembre (hecho Tercero), lo que se ajusta a las previsiones del citado art. 53 , la resolución impugnada, en cuanto declara la imposibilidad, por falta de plazas, de ejecución de los trabajos en beneficio de la comunidad debe ser revocada, pues sin perjuicio de la acumulación y compatibilidad de otras medidas y superadas las dificultades derivadas de la residencia en régimen de internado en Zumarraga, Centro Ibaiondo, la posibilidad de cumplimiento de los trabajos en beneficio de la comunidad debe establecerse en la amplitud geográfica que permita la actual residencia del condenado y bajo los criterios de cumplimiento que pauten los correspondientes Servicios Penitenciarios, conforme a lo dispuesto en el Capítulo II del R.D. 515/2005, de 6 de mayo, cuyos arts. 3 y 4 establecen la obligación de la Administración penitenciaria de facilitar el trabajo en beneficio de la comunidad.

Con lo cual no puede renunciarse a la ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad ni reimponer la privativa de libertad, sin perjuicio de que en su caso la dilación de la ejecución por causas no imputables al condenado pueda dar lugar a la prescripción de la pena.

TERCERO.- Por lo expuesto y razonado es procedente estimar el recurso, dejando sin efecto el pronunciamiento del auto de instancia referido a la imposibilidad de cumplimiento de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad (...)”.

Otras resoluciones, como AAP de Soria Sec.1ª de 17/05/13 ²⁵ abogan que deba acudirse tan solo en última instancia a la revocación de los trabajos (lógicamente por la fecha de la resolución como pena sustitutiva) tras el intento insuficiente de las instituciones penitenciarias para adecuarlo a las circunstancias del reo, incluso en supuesto de limitaciones psico-físicas, su realidad laboral, familiar, dependencia de terceras personas, ordenado su revisión y posibilidades antes de acudir al cumplimiento de prisión.

2. Como conclusión debemos apostar por la pena de trabajos en beneficio de la comunidad como una pena de futuro, esto es, como uno de los objetivos deseables para una sociedad con finalidades exclusivamente reinsertivas y dejando como solución residual la pena de prisión, reservada para aquellos casos donde la prevención especial prima de forma rotunda para la protección de la sociedad. Es decir, para casos de gravedad notable donde es la sociedad y los bienes jurídicos eminentemente personales, los que se hayan en manifiesto peligro (delitos violentos, organizados, torturas y contra la integridad moral, trata de seres humanos, delitos contra la libertad sexual e integridad de los menores) para la sociedad y determinadas víctimas tributarias de necesaria protección hacia un tipo de agresión o determinados y concretos agresores, sin perder de vista la utilidad de los trabajos y la posible concreción expresa en la parte dispositiva de esos tipos penales, conjunto a la prisión, donde se impongan también programas formativos y una evolución positiva sobre los mismos, sin dejar a la suerte la reinsertión del sujeto sometido al mero cumplimiento de una pena privativa de libertad (para algunos delitos, libertad sin garantías o, cuanto menos, sin internar una solución reinsertiva que si ofrecen los trabajos). Los TBC suponen una de las máximas expresiones conducentes a la función de reinsertión, mandato constitucional del que huelga comentar el fracaso que la pena de prisión supone en este sentido y no dejando la solución educativa al residuo del cumplimiento de condiciones para progresar en el grado penitenciario o para acreditar condiciones de suspensión de las penas de escasa duración o sobre el tratamiento de la prisión permanente revisable. Debemos dejar de lado la visión utópica de extender los TBC a todos los delitos en un número máximo que las anteriores premisas lo permitan. La actual definición de trabajos en beneficio de la comunidad contiene complementos educativos, formativos, talleres que, a través del consentimiento del penado que se impone con la realización de TBC, le conduce penado

²⁵ AAP Soria Sección 1ª, de 17/05/2013 recurso nº 39/13.

a su sometimiento (voluntario); al cumplimiento de una pena que le reeduca o, cuanto menos, les/nos resulta útil para la llamada prevención general positiva ²⁶ que también persigue la norma penal. Difícil es lograr el sometimiento del penado a un plan formativo conjunto a la pena de prisión puesto que con el cumplimiento de la pena privativa de libertad el condenado cumple con el castigo impuesto y no se prevé la imposición de ambas penas simultáneamente (como sí ocurre con la prisión y la multa – delitos contra la salud pública y contra la hacienda pública como paradigmas-) de dudosa eficacia por la habitual cuantía de las mismas (hasta el cuádruplo del valor o las cantidades defraudadas) que hacen optar al penado por la responsabilidad personal subsidiaria, de escasa consecuencia reinsertiva, obviando así semejantes esfuerzos económicos.

La práctica diaria en los Juzgados Penales y en la ejecución de las penas lleva a toparnos en muchas ocasiones con el fracaso de esta herramienta por la falta de previsibilidad o empeño de los diferentes operadores jurídicos. En muchas ocasiones el plan de ejecución de los trabajos se ve frustrado por informes de los Servicios de Medidas Alternativas, encargados de confeccionar el plan de cumplimiento adecuado al penado y de conformidad con el Artículo 49 del Código Penal y el Reglamento 840/2011 antes revisado, por el mero hecho de que el penado ha ingresado en prisión por otra condena. En numerosas ocasiones es el propio órgano enjuiciador el que no opta por la pena de trabajos (cuando ésta es alternativa a la de prisión) tan solo por el hecho de que el penado ya se encuentra (o es previsible) cumpliendo condena y partiendo de una incompatibilidad de ambas penas que no debería resultar de aplicación automática. En ocasiones se resuelve por el Juez de Vigilancia Penitenciaria que la realización de trabajos deviene incompatible con el plan de cumplimiento concertado con el penado porque ha ingresado en prisión. En éste trasiego, del que ya hemos tratado, el competente para decidir es el juez sentenciador, sin perjuicio de ser revisado en segunda instancia por la Audiencia Provincial, puede declararse la prescripción de la pena de trabajos, cuando ésta es leve o, sencillamente, se deja en suspenso por estimarla incompatible en su cumplimiento, hasta la terminación de la pena de prisión que, en ocasiones, lleva también a la prescripción de la pena, incluso aun cuando se trate de una pena menos grave (5 años). De esta manera se pierde la oportunidad de la realización de dicha posibilidad que no se reduce a la prestación de servicios, sino que puede ser

²⁶ QUINTERO OLIVARES, Gonzalo. Parte General de Derecho Penal. Aranzadi, p. 562.

propuesta, modificada y reconducida, tras resolución del juez, a otro tipo de actividad formativa, labores de reparación del daño causado, programas reeducativos, talleres cursos de educación vial o sexual, sobre los que no deberían existir obstáculos para realizarlos en el centro penitenciario o, en su caso, habilitar el traslado del penado al centro donde se realicen. En la misma medida, si bien ello puede colisionar con los recursos de los servicios penitenciarios, debería dotarse de medios para que, contando con la vigilancia por los Cuerpos de Seguridad del Estado, los condenados a penas de prisión pudieran llevar a cabo servicios o trabajos fuera del establecimiento penitenciario, cumpliendo así los objetivos de reparación con las víctimas de delitos de la naturaleza con los que guarda identidad la condena y contribuyendo con ello, no sólo a la progresión en grado del reo, sino al objetivo de reinserción. La inversión y el intento merecen la pena.